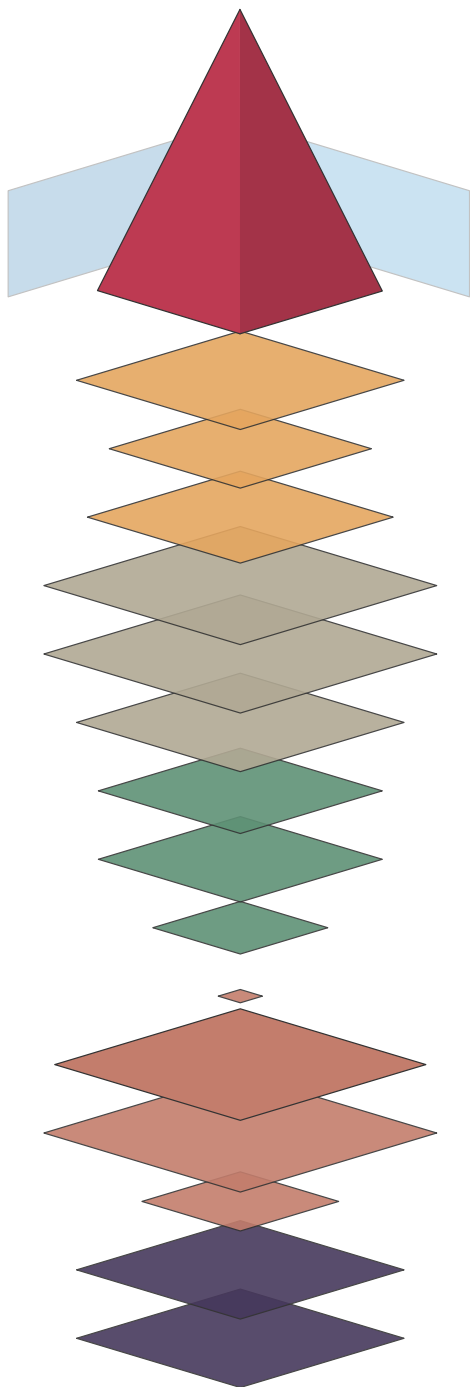




PARAGUAY



7,52

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

4.º de 193 países

3.º de 35 países americanos

2.º de 12 países de América del Sur



MERCADOS CRIMINALES

6,73

TRATA DE PERSONAS **7,50**

TRÁFICO DE PERSONAS **6,00**

EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN **7,00**

TRÁFICO DE ARMAS **9,00**

COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS **9,00**

COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO
SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES **7,50**

DELITOS CONTRA LA FLORA **6,50**

DELITOS CONTRA LA FAUNA **6,50**

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES **4,00**

COMERCIO DE HEROÍNA **1,00**

COMERCIO DE COCAÍNA **8,50**

COMERCIO DE CANNABIS **9,00**

COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS **4,50**

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA **7,50**

DELITOS FINANCIEROS **7,50**



ACTORES CRIMINALES

8,30

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO **8,00**

REDES CRIMINALES **8,00**

ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO **9,00**

ACTORES EXTRANJEROS **9,00**

ACTORES DEL SECTOR PRIVADO **7,50**



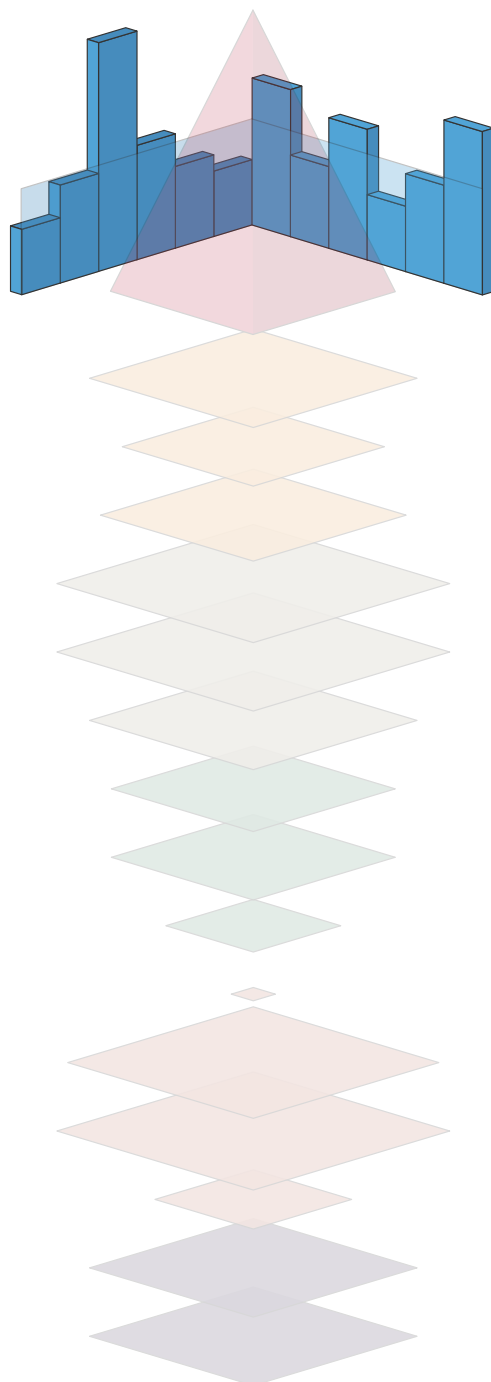
3,42

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA





PARAGUAY



3,42

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

151.º de 193 países

29.º de 35 países americanos

10.º de 12 países de América del Sur

LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	2,00
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	3,00
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	7,00
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	3,50
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	2,50
CUERPOS DE SEGURIDAD	2,00
INTEGRIDAD TERRITORIAL	4,50
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	2,50
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	4,00
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	2,00
PREVENCIÓN	3,00
ACTORES NO ESTATALES	5,00



7,52

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD



MERCADOS CRIMINALES 6,73



ACTORES CRIMINALES 8,30



CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

El mercado de la trata de seres humanos en Paraguay está muy descentralizado y en él participan delincuentes independientes, que cuentan con la ayuda de funcionarios corruptos en distintos niveles del Gobierno. Las víctimas suelen ser captadas a través de aplicaciones de redes sociales y negocios locales, como bares, salones de masajes y servicios de ayuda doméstica. Aunque el tráfico interno representa solo un pequeño porcentaje del comercio, los principales destinos internos son las ciudades más grandes de Paraguay y los principales destinos regionales son los países vecinos. La mayor parte de las ganancias parecen acumularse en los países de destino, donde las víctimas se ven obligadas a pagar miles de dólares en deudas. El trabajo infantil sigue siendo una de las formas más comunes de trata en Paraguay. Además, la práctica del «criadazgo» (observada en Paraguay, en la que particulares acogen a niños para servir como criados domésticos) no está tipificada como delito y, en cambio, está establecida dentro de la cultura, principalmente en el interior del país. También se han denunciado casos de trabajo forzoso entre los pueblos indígenas de la región del Chaco.

Aunque Paraguay no es un destino atractivo para los extranjeros, debido a sus dificultades por las lagunas en su desarrollo económico y social, sirve de país de tránsito para quienes quieren llegar a Argentina y a Brasil. Las autoridades paraguayas han identificado pequeños grupos delictivos, implicados en operaciones de tráfico de personas, que trabajan en cooperación con funcionarios corruptos de la oficina de migración. La frontera de Paraguay con Brasil carece, en gran medida, de regulación, lo que permite la libre circulación de delincuentes. A pesar de ello, el mercado de tráfico de personas de Paraguay es menor que otros mercados ilícitos de la región.

La extorsión y el crimen organizado están aumentando en Paraguay y la extorsión digital es cada vez más frecuente. Los autores, que a menudo forman parte de grandes grupos delictivos, utilizan las redes sociales para obtener datos de sus víctimas y hacerse pasar por alguien cercano a ellas para pedirles dinero. La extorsión suele ser cometida por grupos delictivos organizados locales, sin ayuda de personas ajenas a la organización.

TRÁFICO

Paraguay se ha convertido en un importante centro de tráfico de armas en la región y Brasil es el principal mercado de destino. La corrupción rampante en todos los niveles

del Estado ha permitido la importación legal de un número considerable de armas de fuego, la mayoría de las cuales acaban vendiéndose en mercados delictivos. Además, bandas criminales brasileñas han establecido operaciones de tráfico de armas en ciudades paraguayas, con la ayuda de funcionarios públicos profundamente implicados en el comercio. También entran ilegalmente en el país armas procedentes de Bolivia y de Argentina, a menudo robadas a la Policía y al Ejército e introducidas de contrabando entre mercancías legales.

El comercio de productos falsificados es un mercado delictivo omnipresente en Paraguay, que es uno de los principales destinos de artículos pirateados y falsificados de América del Sur. Se suelen falsificar artículos como ropa, zapatos, relojes, electrodomésticos y perfumes. Los grupos delictivos de Paraguay son los principales actores en el comercio de productos falsificados y tienen conexiones con otros países implicados en delitos similares. Paraguay es también una fuente importante del comercio ilícito de tabaco en la región y la Triple Frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina es un corredor de contrabando clave para el tráfico de tabaco. El comercio ilícito de tabaco contribuye a la financiación de otros delitos, como el tráfico de drogas y el de armas. El contrabando de tabaco también se produce dentro del mercado paraguayo, pero su objetivo principal es la exportación a otros países. Se sabe que algunas empresas producen varios millones de cigarrillos sin declarar su producción. El contrabando también se da entre Paraguay y Argentina, con mercancías como bebidas alcohólicas que llegan a Paraguay. El contrabando está muy extendido en el país: más de una cuarta parte de los productos de la economía son de contrabando. Las principales asociaciones empresariales del país afirman que el reciente aumento del contrabando se debe a la connivencia entre los organismos de control y los contrabandistas.

MEDIOAMBIENTE

Paraguay ha perdido más de una cuarta parte de su cubierta arbórea en las dos últimas décadas y el tráfico de madera es la principal actividad delictiva en el mercado de la flora del país. En este mercado operan grupos delictivos independientes, con la ayuda de funcionarios corruptos, y se sabe que agentes brasileños financian las operaciones de tala. Se sabe incluso que los madereros ilegales atacan a las autoridades locales con armas de fuego y amenazas de muerte. A pesar de la existencia de marcos legales para la protección de los bosques, la impunidad sigue siendo rampante, debido a la falta de una política estatal o de un marco regulador eficaz. Quienes intentan denunciar delitos contra la flora se enfrentan a sobornos, la pérdida del empleo o la muerte, debido a la influencia política y económica de las élites terratenientes.

Los delitos contra la fauna en Paraguay están impulsados por redes criminales de baja escala, que venden como mascotas animales amenazados, a través de las redes sociales y de puntos de venta informales, con la ayuda de funcionarios corruptos. A pesar de contar con leyes para proteger a las especies amenazadas, las instituciones y la aplicación de la ley en el país son débiles, lo que permite que continúe la impunidad y la caza ilegal y la pérdida de hábitat siguen siendo los principales riesgos para las especies amenazadas o en peligro de extinción en Paraguay, como el jaguaré (Panthera onca), el aguará guazú (Chrysocyon brachyurus), el taguá (Catagonus wagneri) y el tatú carreta (Priodontes maximus).

Aunque el mercado de los delitos contra los recursos no renovables es relativamente pequeño en Paraguay, en comparación con los países vecinos, la extracción de oro, uranio y titanio puede convertirse en una fuente de conflictos en el futuro. Una parte importante del oro extraído ilegalmente que se introduce de contrabando en Europa se valida en Paraguay, mediante el soborno de autoridades que crean documentación falsa. También hay informes de tráfico de mercurio a través del país. El contrabando de gasolina está aumentando actualmente, ya que los elevados precios del petróleo y las subvenciones de la vecina Argentina hacen que la diferencia de precio resulte atractiva para los consumidores. Esto ha provocado una notable disminución de las ventas en las gasolineras legales de las zonas fronterizas, en las que incluso entran ilegalmente camiones cisterna. Se cree que los beneficios de los delitos contra los recursos no renovables se quedan en el sector empresarial de élite y que las autoridades corruptas permiten la continuación de las actividades ilegales.

DROGAS

La heroína no es una droga significativa para el consumo ni para el tráfico en Paraguay y el mercado global es casi inexistente. Sin embargo, Paraguay es ampliamente reconocido como un país de tránsito y destino para el tráfico de cocaína y en los últimos años se ha ido convirtiendo cada vez más en un país de origen. Ha habido un aumento en la incautación de «pasta base», lo que indica un crecimiento del procesamiento de cocaína. Aunque no hay registros oficiales de plantaciones de coca en el país, se calcula que cada año pasan por él unas 200 toneladas de cocaína, en su mayor parte procedentes de Bolivia y de Perú. Los narcotraficantes utilizan cada vez más las rutas aéreas y las marítimas, para eludir las restricciones a los viajes por tierra. En la logística del movimiento de cocaína en Paraguay intervienen diversos actores, como jornaleros agrícolas, propietarios de fincas, agentes de Policía, pilotos y élites políticas. A diferencia de los individuos antes mencionados, estas élites políticas pueden ser tentadas con sumas exorbitantes, que a menudo alcanzan los cientos de miles de dólares, a cambio de proteger a los narcotraficantes. Al

parecer, la expansión del mercado de la cocaína en el país ha provocado un aumento de los homicidios y la violencia relacionados con el crimen organizado.

Paraguay es el mayor productor ilegal de cannabis de América del Sur y la mayor parte se trafica a Brasil. Las élites locales, con el apoyo de actores estatales, controlan el mercado de la marihuana, con vínculos con funcionarios del Ejército e incluso del Poder Ejecutivo. Los grupos criminales extranjeros también han extendido su control sobre el comercio de la marihuana en Paraguay. Las comunidades de las zonas rurales ven la marihuana como una fuente de ingresos legítima y hay informes de comunidades indígenas que alquilan sus tierras a bandas brasileñas para cultivar cannabis. La firma de un decreto para legalizar la producción industrial de marihuana, otorgando una serie de licencias para su importación y su fabricación, y la falta de capacidad estatal para combatir el comercio podrían fomentar el crecimiento de la producción ilegal.

La producción de drogas sintéticas dentro de Paraguay es evidente desde hace casi una década. Paraguay sirve como centro de distribución de drogas sintéticas destinadas principalmente a Brasil y a Argentina. Aunque los grupos delictivos más grandes coordinan las operaciones de importación, parece que en la comercialización de drogas sintéticas dentro del país participan redes delictivas poco estructuradas, compuestas en su mayoría por jóvenes de zonas urbanas. Pequeñas cantidades de drogas sintéticas se camuflan entre mercancías legales y se envían a ciudades como Ciudad del Este, en la Triple Frontera, por correo aéreo. Las pruebas sugieren que el papel de Paraguay en el comercio de las drogas sintéticas se ha ampliado en los últimos años.

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

Paraguay se ha visto significativamente afectado por la ciberdelincuencia y la mayoría de los ataques se atribuyen a redes delictivas extranjeras, que aprovechan sistemas vulnerables. Estos delitos incluyen malware, spam y ransomware y, en algunos casos, los delincuentes contratan a personas experimentadas de todo el mundo para cometerlos. Los ciberdelitos suelen pasar desapercibidos para las víctimas. Aunque Paraguay cuenta con un nivel moderado de ciberseguridad, estos ataques ponen de manifiesto la necesidad de seguir trabajando para reforzar las defensas del país.

DELITOS FINANCIEROS

Los delitos financieros han ido en aumento en Paraguay y las empresas son los autores más comunes. Los delitos cometidos incluyen malversación, evasión fiscal y enriquecimiento ilícito. Muchos casos implican a representantes del Gobierno y la corrupción suele estar vinculada a mercados o grupos

delictivos. Algunos casos de gran notoriedad incluyen la malversación y el uso indebido de recursos estatales por parte de políticos electos.

ACTORES CRIMINALES

Los mercados criminales en Paraguay están fuertemente influenciados y facilitados por actores estatales, que van desde funcionarios de seguridad de bajo nivel hasta funcionarios de élite. Estos actores no solo facilitan las actividades delictivas, sino que también crean obstáculos para perseguir a los actores criminales y mafiosos. La corrupción está tan arraigada en la sociedad que es una constante, independientemente del Gobierno, y es habitual que los agentes de Policía y los funcionarios de los servicios estatales exijan sobornos. Además, la economía ilegal es clave para los partidos políticos del país, con muchos contrabandistas y narcotraficantes ricos que, al parecer, utilizan sus beneficios para financiarlos.

Los delincuentes extranjeros, en particular las bandas brasileñas, están muy implicados en el comercio ilícito local. También ejercen una influencia considerable sobre el sistema penitenciario local. Además de las bandas brasileñas, los zares tradicionales del contrabando, de origen medio oriental, y las organizaciones mafiosas chinas también dirigen operaciones en Paraguay, principalmente en la Triple Frontera. A pesar de los vínculos entre los políticos

de alto nivel y las actividades delictivas, no hay pruebas de que grupos extranjeros influyan directamente en los procesos democráticos de Paraguay.

Paraguay cuenta con varios grupos mafiosos, que controlan gran parte del tráfico de drogas, dentro y fuera de las cárceles. Los grupos guerrilleros también cobran un «impuesto revolucionario» y atacan la infraestructura agrícola. Los mayores grupos mafiosos brasileños también tienen filiales paraguayas, debido a su membresía local. Estas dominan los mercados del contrabando de cigarrillos y del tráfico de drogas y de armas en el país. Las redes criminales de Paraguay están implicadas en el contrabando de mercancías a través de las fronteras y en el robo de combustible de los barcos. Se cree que estos grupos operan con el conocimiento o la participación de altos funcionarios del Gobierno. La pandemia de la COVID-19 ha aumentado la demanda de productos de contrabando, lo que ha tenido un notable impacto social y económico en el país.

El comercio ilegal de tabaco en Paraguay está dominado por actores del sector privado, que han sido acusados de evasión fiscal e influencia política. Se ha descubierto que las empresas han evadido millones de dólares en impuestos, pero, tras proferir amenazas, han conseguido suprimir la denuncia de estos delitos. También cuentan con personas influyentes en el Gobierno, que han sido utilizadas para perseguir a los particulares que se incautan de sus cargamentos ilegales.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

El liderazgo político y la gobernabilidad de Paraguay siguen siendo motivo de gran preocupación. Actores de los dos principales partidos políticos han sido acusados de formar un «pacto de impunidad» para evitar la investigación de las acusaciones de corrupción. Miembros del actual gabinete han enfrentado críticas por su ineficacia y su falta de experiencia al servir en la unidad anticorrupción. Además, se han producido manifestaciones masivas contra el Gobierno, desde que los niveles de corrupción salieron a la luz y se vieron exacerbados por la pandemia de la COVID-19, que ha provocado la indignación de la opinión pública. La pandemia también ha puesto de manifiesto la prevalencia de rasgos autoritarios en las instituciones del Estado, en particular los abusos de las fuerzas policiales. Paraguay ha tomado medidas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en su Gobierno, como la creación de un sitio web de transparencia y una nueva Ley de Contrataciones Públicas. Sin embargo, el país sigue teniendo un marco legal deficiente para el acceso a la información y un alto nivel de

corrupción percibida. Las lagunas legales, sobre todo en la financiación de campañas, y unos organismos de control que se limitan a reaccionar y no a prevenir contribuyen a la corrupción en todos los niveles del Estado. Además, la falta de seguridad jurídica y la falta de independencia del Poder Judicial se traducen en altos niveles de impunidad, discontinuidad de políticas y proyectos y escaso desarrollo de una cultura de la ética.

Paraguay ha firmado tratados y convenciones internacionales relevantes, relacionados con el crimen organizado, y coopera con la mayoría de los países latinoamericanos en la lucha contra el narcotráfico. Aunque ha firmado muchos tratados de extradición con países de América, no ha logrado extraditar a políticos de alto nivel implicados en actividades delictivas. El país cuenta con varias leyes para combatir el crimen organizado, como el tráfico de armas, la producción y el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y los delitos contra el medio ambiente. Sin embargo, la aplicación de estas leyes es deficiente, debido a la falta

de políticas claras y de planes o estrategias nacionales integrales que orienten las acciones contra actividades delictivas específicas.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

La corrupción y la politización están muy extendidas en el sistema judicial de Paraguay, especialmente en los tribunales inferiores y las oficinas regionales, lo que socava la confianza pública y contribuye a la impunidad de los altos cargos. Se están haciendo esfuerzos para fortalecer el sistema judicial especializado en crimen organizado y delitos económicos, pero persisten problemas sistémicos; por ejemplo, hay una ley que permite que políticos e individuos influyentes condenados en tribunales inferiores eviten el castigo, presentando apelaciones y mociones hasta que se alcanza el límite legal de cuatro años. La impunidad es rampante en los casos de malversación, evasión fiscal y otros delitos. A los acusados pobres se les suelen imponer fianzas excesivamente altas, mientras que los acusados con conexiones políticas o los ricos reciben concesiones. El sistema penitenciario también se enfrenta a numerosos retos, con una superpoblación que provoca el desarrollo de grupos criminales en las prisiones y conduce a un aumento de la actividad delictiva, tanto dentro como fuera del sistema. La corrupción en el sistema penitenciario es habitual, con funcionarios en connivencia con líderes criminales para proporcionarles privilegios o ayudarlos a escapar.

Las fuerzas del orden paraguayas han sido acusadas de corrupción y de participación en actividades delictivas, como el narcotráfico y el contrabando. La Policía y otras agencias de seguridad operan ad hoc y la mayoría de las estrategias contra el crimen organizado provienen de la cooperación con las autoridades brasileñas y las argentinas para controlar las fronteras, más que dentro del Gobierno. Aunque se espera que los recientes acuerdos de cooperación internacional mejoren la capacidad del Gobierno para luchar contra la delincuencia, aún está por ver si el acceso a mejores servicios de inteligencia y equipos se traducirá en mejoras de la seguridad, más allá de las operaciones de incautación, erradicación y detención. Las garantías constitucionales del debido proceso se respetan poco y los casos como los asesinatos cometidos por policías han sido encubiertos por el Poder Judicial.

El Estado lucha por controlar las zonas con fuerte presencia delictiva, incluida la mayor parte de las fronteras físicas con Brasil y las zonas controladas por el Ejército Popular Paraguayo. El país sigue teniendo dificultades para controlar el contrabando de gas y de otros productos a través de su frontera con Argentina, así como para controlar los vuelos del narcotráfico procedentes de Bolivia. A nivel interno, Paraguay cuenta con un plan nacional de ciberseguridad y un equipo de respuesta a emergencias informáticas para responder a incidentes cibernéticos.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Paraguay tiene un largo historial como país de alto riesgo para el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Aunque se han aprobado nuevas normativas, los esfuerzos del Gobierno parecen estar más orientados a cumplir las normas internacionales que a lograr resultados efectivos. Los delincuentes utilizan cada vez más a Paraguay para blanquear dinero ilícito, mediante la adquisición de bienes inmuebles, haciendas ganaderas y otros activos, y el Estado parece carecer de voluntad política para combatir eficazmente este delito. La Triple Frontera, compartida con Brasil y Argentina, es un centro crucial para el blanqueo de dinero y una fuente de financiación para redes delictivas y terroristas.

El entorno económico regulatorio de Paraguay está plagado de crimen organizado, ejemplificado por casos de lavado de dinero, contratistas estatales acusados de tráfico de armas y falta de transparencia en los negocios energéticos estatales. El aumento del contrabando está minando los sectores económicos formales, ya que pagan impuestos y aduanas y no pueden competir con las redes de contrabando. A pesar de las mejoras en el clima empresarial, la corrupción, los efectos de la pandemia de la COVID-19, la falta de innovación y la escasez de mano de obra cualificada plantean importantes retos a los inversores. Sin embargo, la subida de los precios de las materias primas presenta oportunidades para la agroindustria, donde Paraguay es líder en la región.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

A pesar de los esfuerzos del Gobierno paraguayo para mejorar el apoyo y la protección a las víctimas, varios casos sonados han demostrado su incapacidad para proteger a víctimas y testigos. Aunque se han implementado nuevos procedimientos para examinar a los niños que viajan solos, a fin de detectar indicadores de trata, muchas víctimas se ven obligadas a regresar a sus hogares, debido a la falta de refugios suficientes. La calidad del apoyo a las víctimas, especialmente en las zonas rurales, sigue siendo inadecuada, debido a la insuficiencia de recursos financieros y humanos.

El enfoque del Gobierno paraguayo para prevenir el crimen organizado ha sido infructuoso, centrándose principalmente en operaciones antidroga. En los últimos años, disminuyeron los esfuerzos de prevención del Gobierno y la escasa coordinación interinstitucional ha limitado su capacidad para recopilar estadísticas y tomar decisiones. En lugar de asignar fondos para campañas de concienciación pública a sus instituciones, el Gobierno confía en las sociedades civiles, las empresas y los sindicatos para llevar a cabo campañas en zonas de alto riesgo.

Los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación de Paraguay siguen sufriendo amenazas y agresiones y algunos de ellos han muerto. Los funcionarios públicos han perpetrado más de la mitad de las agresiones

contra periodistas, lo que indica un deterioro de la libertad de expresión en los últimos años. Los medios de comunicación siguen concentrados en manos de unos pocos individuos y las radios comunitarias luchan por sobrevivir. Además, los defensores de los derechos humanos en Paraguay se han enfrentado a un aumento de la estigmatización y la persecución judicial. También se denunció el uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía durante las protestas celebradas contra la gestión gubernamental de la pandemia de la COVID-19 y la corrupción asociada a ella. Mientras que el acceso político a las ONG tiende a concederse a altas personalidades del mundo empresarial o a grupos religiosos, los grupos de derechos humanos son acusados cada vez más de reflejar una agenda liberal internacional, por lo que estos grupos son desestimados.

Este resumen ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.